

COLUMNISTA
INVITADO

IRENE GIMÉNEZ
mf@prensa.com



Subsidios al consumo

OPINIÓN | Los subsidios que sostienen el Estado deben eliminarse, porque no solo resultan una carga en el presupuesto nacional, significan también un impedimento para las inversiones, pues subsidios y controles de precios hacen difícil el cálculo de costos y afectan la rentabilidad que incentiva a un empresario a realizarlas.

Además, generan grupos de privilegiados, pues estos subsidios siendo pagados por todos a través de impuestos, benefician sólo a ciertos consumidores, así miles de ciudadanos que no disponen de automóvil terminan pagando parcialmente el combustible de los ciudadanos que sí disponen de carros.

El Gobierno debe acompañar estas medidas con una reducción radical de los impuestos. Estas reducciones tributarias no solo permitirán a los ciudadanos mantener su poder adquisitivo, e impulsarán la producción y la generación de empleos; también harán más atractivo el país para la inversión nacional y extranjera. Las regulaciones en el sector energético deben eliminarse para facilitar que una empresa instale refinerías, oleoductos, terminales de abastecimiento de combustibles, plantas termoeléctricas, redes de transmisión, procesadoras de biocombustibles, etc., pues a los usuarios no les interesan los argumentos de "servicios estratégicos", "monopolios estatales naturales" o "soberanía energética".

A los usuarios les interesan buenos productos y servicios entregados a tiempo y sin interrupciones, sin

importar si estos servicios son provistos por empresas nacionales o extranjeras. La competencia debe primar, no deben existir regulaciones que impidan el ingreso de nuevas empresas; nunca el sector privado subsidiado se ajustará a parámetros de eficiencia empresarial, sino en la institucionalización de privilegios dañinos. ¿Para qué innovar y competir en un mercado libre si protegidos por el Estado nos va mejor y no corremos riesgos?

El subsidio hace que los precios del producto subsidiado sean menores a los que el mercado determinaría. El usuario entonces no siente la necesidad de ahorrar o disminuir su uso dado que el precio no refleja lo que está ocurriendo en la realidad.

Cuando el Gobierno hace bajar artificialmente el precio global de los combustibles, gas, luz, alimentos, etc. los hace más accesibles para personas de bajos recursos. Pero también los abarata para los ricos y para las compañías que los adquieren para elaborar bienes y servicios que se exportan y con ello los ciudadanos panameños les regalan su trabajo y esfuerzo a miles de ciudadanos en el mundo en detrimento de los nacionales.

Los subsidios que se dirigen a los consumidores son tan grandes que no son sostenibles en el tiempo. Será necesario, entonces, reducirlos por dos razones: para ahorrar en el gasto y para redirigirlos a donde se necesitan más urgentemente.

Para compensar a los más pobres por la diferencia entre el precio regulado y el precio internacional se les entrega directamente un vale que también costará, pero se estará eliminando un gasto mucho mayor.

Ningún subsidio es gratuito; lo pagamos todos con impuestos y con menos oportunidades para los más pobres, al desperdiciar los escasos recursos que podrían ser invertidos en nuevas empresas y generar más y mejores trabajos.

*La autora es gerente general de
Goethals Consulting*